

La burguesía local presiona en tiempos electorales

Acuerdo de Chapultepec

- No respetan el derecho, ni invierten ni crean empleo, solamente se enriquecen.
- Los empresarios millonarios de México pretenden un acuerdo para incrementar sus fortunas.
- Estos burgueses han sido los beneficiarios de las inconstitucionales privatizaciones.
- Su intención es la privatización TOTAL de las industrias petrolera y eléctrica.
- El FTE de México rechaza las propuestas del Capital y sus voceros en México.

Millonarios reiteran propuestas viejas

El 29 de septiembre, alrededor de 300 empresarios, intelectuales y académicos, fueron convocados por el millonario Carlos Slim, en el alcázar del Castillo de Chapultepec donde dieron a conocer a la opinión pública mexicana el “Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, la Inversión y el Empleo”. El evento contó con la presencia de Carlos María Abascal Carranza, Secretario de Gobernación de Fox.

Los asistentes firmaron e hicieron público este acuerdo, conocido como “el Acuerdo de Chapultepec”, que bajo una visión totalmente empresarial plantea 5 ejes, con el objeto, según ellos, de “convocar a los mexicanos a la construcción de una democracia para garantizar nuestras libertades, nuestra pluralidad y nuestros derechos” (Periódico *La Jornada*, 30 de Septiembre de 2005). Dichos ejes son los siguientes:

1. Estado de Derecho y Seguridad Pública
2. Desarrollo con Justicia, Crecimiento Económico y Empleo
3. Formar y desarrollar Capital Humano y Social
4. Desarrollo de Capital Físico
5. Reforma de Administración Pública.

Destaca el eje 2, “Desarrollo con justicia, Crecimiento económico y empleo” que, entre otras cosas, propone “*cambiar el marco legal para poder sumar el ahorro privado y el social a la capacidad*

de las finanzas públicas” aludiéndose a un punto en donde existe un profundo rechazo de la sociedad mexicana: *el de la privatización parcial o total del Sector Energético Mexicano*.

Esta propuesta no es nueva, ni bien intencionada, y mucho menos busca construir desarrollo con justicia social, sino que está acorde con lo planteado por los gobiernos neoliberales de nuestro país, desde 1982, por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, después por Salinas de Gortari, luego por Ernesto Zedillo, y ahora por Vicente Fox: Entregar nuestros recursos energéticos (Petróleo, Gas y Electricidad), a los empresarios nacionales y transnacionales. Eso, en gran medida, ya lo están haciendo.

Beneficiarios de las privatizaciones

Este “acuerdo para la unidad nacional” está planteado por un puñado de millonarios, *quienes han sido los principales beneficiarios de la política de privatizaciones de empresas públicas* implantada en México desde 1982: Carlos Slim, además de Salinas Pliego y Emilio Azcárraga, dueños de Televisión Azteca y Televisa respectivamente, quienes son los principales promotores de este documento empresarial.

Es de dominio público que, el gobierno federal a partir de 1982 comenzó con la política de privatización de organismos públicos. Con el afán de maquillar este proceso, desde aquel entonces lo llamaron “proceso de desincorporación de empresas públicas”, así el gobierno mexicano vendió una gran

2005 energía 5 (68) 6, FTE de México

cantidad de empresas públicas, a precios francamente ridículos y risibles, multiplicando enormemente las inmensas fortunas de personajes como Carlos Slim, que adquirió entre 1982 y 1983: Hulería el Centenario y la cadena de restaurantes Sanborns; en 1985, compró Porcelanite, Euskadi y las fábricas de papel Loreto y Peña Pobre; en 1986, la Compañía Minera Frisco y Nacional de Cobre; en 1989, Bicicletas de México.

El negocio más grande y jugoso de Slim vendría en 1990, cuando el Gobierno mexicano subastó *Teléfonos de México (Telmex)* que en aquel entonces era empresa pública de participación estatal mayoritaria. El Grupo Carso (con Slim al frente) encabezó al consorcio ganador que pagó 1 mil 757 millones de dólares por la compañía. Sectores progresistas y democráticos denunciamos que había sido favorecido por el entonces presidente Carlos Salinas. El resultado es que su fortuna creció a tal grado, que en los últimos años aparece reiteradamente en la lista de Forbes, que publica las fortunas de las 500 personas más ricas del planeta. Como se puede observar el ascenso de Slim ha sido espectacular, para un empresario que hasta hace poco más de quince años era un ilustre desconocido, pero gracias a la política neoliberal de privatizaciones hoy representa la cuarta fortuna mundial.

Asimismo, entre otros firmantes de este “Acuerdo de Unidad Nacional”, están Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, María Asunción Aramburuzabala, etc., quienes también han visto crecer sus fortunas al amparo de las privatizaciones de empresas públicas: Ricardo Salinas Pliego con 2 mil 600 millones de dólares; María Asunción Aramburuzabala con mil 800 millones de dólares; Jerónimo Arango con 3 mil 600 millones de dólares; Alberto Bailleres con 2 mil 700 millones de dólares; Lorenzo Zambrano con 2 mil 200 millones de dólares; Roberto Hernández con 2 mil millones de dólares; Alfredo Harp Helú con mil 200 millones de dólares y Emilio Azcárraga Jean con mil millones de dólares. (Fuentes: *Revista Forbes*, periódico *La Jornada*).

Fortunas ilegítimas y escandalosas

El proceso de privatizaciones le ha salido caro a México, como lo muestran los siguientes datos: *De los 1,155 organismos públicos que existían en 1982, el gobierno mexicano vendió más de 1000, obteniendo por su venta 31,538 millones de dólares,*

esto incluye la venta de carreteras, bancos, aerolíneas, telecomunicaciones, etc. Lo que los mexicanos hemos tenido que pagar después, para rescatar estas empresas de la quiebra, son 109 214 millones de dólares, casi 300% más de lo que había ingresado al fisco por la venta de las citadas empresas (Fuente: Datos del Banco de México).

En consecuencia, de acuerdo a cifras conservadoras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cerca del 60% de la población mexicana, se encuentra en estado de pobreza, situación que no va a cambiar con la firma de un “Acuerdo Nacional para la Unidad”, sino solamente con un cambio profundo y radical de la política económica de nuestro país.

Por otra parte, hay que señalar que muchas afirmaciones que se hacen en este documento denominado “Acuerdo nacional”, no son más que justificaciones del modelo económico neoliberal, como por ejemplo las llamadas “consideraciones generales”. Se dice que *“Los recursos disponibles del sector público son y serán insuficientes para que el Estado se haga cargo de estos desafíos por sí solo. Para nuestro desarrollo sostenido y sustentable, es necesario sumar los ahorros privado y social.”*

En este punto habría que recordarles a Slim y compañía, que el problema no es la falta de recursos del sector público. Como ejemplo, tenemos las auditorías realizadas en 2004 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a empresas públicas como Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) las que arrojaron, entre otras conclusiones, que *los ingresos de estas dos empresas las hacía autosuficientes, por lo que no había necesidad de inversión privada en materia de generación eléctrica.*

Este viejo pretexto de la “falta de recursos del sector público”, es el mismo que utilizó Zedillo en su iniciativa de privatización de la Industria Eléctrica en febrero de 1999. Lo mismo ha sido argüido por Vicente Fox al promover sus 5 iniciativas de privatización del Sector Eléctrico el 16 de agosto del 2002. Estos pretextos fueron desmentidos por el Congreso de la Unión y por expertos en la materia.

Más aún, los recursos que ingresan a estas empresas, y que la Hacienda Nacional recauda, se destinan para el pago de la deuda externa. Por lo tanto, mientras se siga privilegiando el pago de la deuda externa, lógicamente no habrá recursos para

invertir no sólo en el Sector Energético, sino tampoco en educación, salud y vivienda.

Los mexicanos rechazamos las privatizaciones

Debemos recordar que en Junio de 2004, el Banco Mundial publicó una encuesta que realizó a nivel de América Latina, para valorar la opinión de los ciudadanos de esta región sobre las privatizaciones. En el caso de México el resultado fue el siguiente:

“Con base en información de empresas de demoscopía regionales, el Banco Mundial *señaló que al menos tres de cada cuatro mexicanos desaprueban las privatizaciones*, cifra que revela un cambio de tendencia respecto de lo que ocurría hace apenas seis años. *En 1998, la incorporación del capital privado a actividades reservadas al Estado era desaprobada por 40 por ciento de la población, pero en 2000 ya era 60 por ciento y creció hasta 75 por ciento en la última muestra*”.

El reporte *Reformando la Infraestructura*, divulgado por el Banco Mundial en Washington, establece que "la hostilidad" creciente a las privatizaciones "no está limitada a un puñado de manifestantes radicales". Encuestas de opinión pública en varios países en desarrollo o en transición (como se identifica a las naciones del ex bloque comunista) revelan "un creciente desencanto" hacia estas políticas, una desilusión

2005 energía 5 (68) 7, FTE de México *alimentada por el despido de personas, el incremento de precios, el retraso (o ausencia) de los beneficios prometidos y el impacto de las privatizaciones en la distribución de la riqueza*". La conclusión es clara: Según el propio Banco Mundial, tres de cada cuatro mexicanos rechazamos las privatizaciones.

Los patrones quieren la privatización total, el FTE rechaza esos acuerdos

Queda claro que lo planteado en el “Acuerdo para la Unidad Nacional”, entre otras cosas no es más que un intento de los empresarios para revertir esta tendencia y culminar el proceso de privatizaciones, con el objeto de apoderarse sobre todo del Sector Energético (Petróleo, Gas y Electricidad).

En este contexto político, el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) de México rechaza públicamente este llamado Acuerdo de Chapultepec y en particular la propuesta del eje 2 del “Acuerdo para la Unidad Nacional”, que establece: “es necesario cambiar el marco legal para poder sumar el ahorro privado y el social a la capacidad de las finanzas públicas en virtud de que esto traería como consecuencia la privatización TOTAL de nuestra Industria energética nacionalizada.



Trabajadores mexicanos en lucha encabezados por el SME